

La consulta plantea la posibilidad de editar un anuario con los datos de los socios y un listado de Clubs Corresponsales del Club consultante, para distribuirlo entre éstos, con la finalidad de fomentar las relaciones sociales y profesionales entre dichos socios y Clubs, y la forma de recabar su consentimiento, en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

I

En primer lugar es preciso tener en cuenta el ámbito al que se extiende la aplicación de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo definido en su artículo 1 que señala. “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.”

A su vez, el artículo 2 del Reglamento establece:

2. Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.

3. Así mismo, los datos relativos a los empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.”

Por lo tanto quedarían excluidos de su aplicación el tratamiento y cesión de datos que se refieran a personas jurídicas, como podrían ser los Clubs Corresponsales, a los denominados datos de contactos de empresas del artículo 2.2 citado y empresarios autónomos en tanto fueran socios por su condición de comerciantes, industriales o navieros.

II

Si los socios cuyos datos personales se incorporarían al anuario a editar y distribuir fueran personas físicas, estaríamos ante un supuesto de cesión de datos de carácter personal.

Con carácter general, la revelación a unos socios de los datos referentes a los demás socios implicará la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Tratándose de una cesión de datos, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, no será preciso el consentimiento del interesado “Cuando la cesión está autorizada en una Ley” (artículo 11.2 a).

En este sentido, el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación impone a las asociaciones la llevanza de una relación actualizada de sus asociados, indicando el artículo 14.2 que “los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relacione en el apartado anterior, a través de sus órganos de representación, en los términos previstos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal”.

En consecuencia y dado que en los términos de la Ley 15/1999, sólo con el consentimiento del interesado será posible la cesión de sus datos de carácter personal, a juicio de esta Agencia Española de Protección de Datos no procederá la cesión a menos que exista el mencionado consentimiento, expreso o tácito, del afectado para la comunicación de los datos descritos que comporta la publicación y distribución del anuario en el ámbito de la propia asociación consultante.

Ello no obstante, será posible entender prestado el consentimiento en aquellos supuestos en que conste en los Estatutos de la entidad una cláusula que establezca el derecho de los socios a conocer a las restantes personas que integran la asociación, por cuanto el interesado, al prestar su conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, habrá consentido la cesión que en los mismos se prevea. No obstante, esta Agencia de Protección de Datos no puede dar una respuesta terminante a esta cuestión, al desconocer el contenido de los citados Estatutos, respecto de los derechos que éstos reconocen a sus socios.

III

En el supuesto de que no se contemple en los Estatutos el derecho de los socios a poder conocer los datos personales de los demás socios, y, como ya se dijo, se necesite recabar el consentimiento de los afectados para la comunicación de sus datos personales, debe tenerse en cuenta que el artículo 3 h) de la LOPD entiende por consentimiento del interesado “Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.”

Del concepto de consentimiento se desprende la necesaria concurrencia para que el mismo pueda ser considerado conforme a derecho de los cuatro requisitos enumerados en dicho precepto. Un adecuado análisis del concepto exigirá poner de manifiesto, como indica la consulta, cuál es a juicio de esta Agencia la interpretación que ha de darse a estas cuatro notas características del consentimiento. La Agencia Española de Protección de Datos ha venido sosteniendo los criterios sentados en las diversas recomendaciones emitidas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en relación con la materia que nos ocupa, que el consentimiento habrá de ser:

a) Libre, lo que supone que el mismo deberá haber sido obtenido sin la intervención de vicio alguno del consentimiento en los términos regulados por el Código Civil.

b) Específico, es decir referido a un determinado tratamiento o serie de tratamientos concretos y en el ámbito de las finalidades determinadas, explícitas y legítimas del responsable del tratamiento, tal y como impone el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

c) Informado, es decir que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento la existencia del mismo y las finalidades para las que el mismo se produce. Precisamente por ello el artículo 5.1 de la Ley Orgánica impone el deber de informar a los interesados de una serie de extremos que en el mismo se contienen.

d) Inequívoco, lo que implica que no resulta admisible deducir el consentimiento de los meros actos realizados por el afectado (consentimiento presunto), siendo preciso que exista expresamente una acción u omisión que implique la existencia del consentimiento.

El cumplimiento de estos requisitos se logra, esencialmente, mediante el cumplimiento del deber de información, impuesto al responsable del tratamiento por el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, cuyo apartado 1 dispone que “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean

planteadas. c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

Al propio tiempo, debe recordarse que, tal y como dispone el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 15/1999, “El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene también un carácter de revocable” y que el artículo 16 reconoce el derecho de los afectados a ejercitar sus derechos de rectificación y cancelación.

IV

En cuanto a la forma de prestar el consentimiento, de las características exigidas al mismo por el artículo 3h) de la LO 15/1999, no se infiere necesariamente el carácter expreso en todo caso, razón por la cual en aquellos supuestos en que el legislador ha pretendido que el consentimiento deba revestir ese carácter, lo ha indicado expresamente, así sucede en el caso de datos especialmente protegidos. Por tanto el consentimiento podrá ser tácito, en el tratamiento de datos que no sean especialmente protegidos. Si bien, para que el consentimiento tácito pueda considerarse inequívoco será preciso otorgar al afectado un plazo prudencial para que pueda tener claramente conocimiento de que su omisión de oponerse al tratamiento implica un consentimiento mismo. En cuanto al plazo para oponerse, el artículo 14. 2 del Reglamento establece el de 30 días para manifestar su negativa, debiéndose facilitar al interesado un medio sencillo y gratuito para manifestar su negativa a la cesión de sus datos, entre otros, mediante un envío prefranqueado al responsable en el que pudiera marcarse una casilla al efecto, la llamada a un número de teléfono gratuito o a los servicios de atención al público que el mismo hubiera establecido (art. 14.4 del Reglamento), o bien, como sugiere el consultante mediante comunicación a través de su página web en la que se habilite una casilla, por ejemplo, para poder oponerse a la cesión.

Debe tenerse en cuenta, además, que el artículo 12.3 del Reglamento atribuye al responsable del tratamiento o cesión la prueba de la existencia del consentimiento del afectado, por cualquier medio de prueba admisible en derecho.